bandera socialista

PST

Periódico del Partido Socialista de los Trabajadores

Año XLIX
N° 144
Julio 2024

pstperú Lit-ci
http://pst.pe
bs.pstperuano@gmail.com

2.00 soles

AREQUIPA Y CAJAMARCA RECHAZAN PROYECTOS MINEROS

¡ABAJO BOLUARTE Y EL CONGRESO!

CGTP: 19 JULIO PARO NACIONAL 28 - 29 MARCHA HACIA LIMA

RETORNA LUCHA CONTRA GOBIERNO Y CONGRESO pág. 2

UN LLAMADO A LA REBELIÓN OBRERA Y POPULAR pág. 3

UN "GOLPE DE ESTADO PERMANENTE" pág. 4

PACTO DE IMPUNIDAD pág. 5

LA RESPUESTA VIENE DE DENTRO pág. 6

EMPIEZA LUCHA CONTRA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA pág. 7

CRECE LA SOLIDARIDAD CON PALESTINA págs. 10-11

Abajo la Ley de Bases y el Plan de Milei

pág. 12

50 años PST
LIT-CI
Partido Socialista de los Trabajadores

Retorna la lucha contra el gobierno y el Congreso

El reciente 12 de junio, la Junta de Fiscales Supremos se pronunció para rechazar el proyecto de Reforma que declara en reorganización a la Junta Nacional de Justicia y al Ministerio Público, y convocaron a la ciudadanía a sumarse a la "defensa de la democracia y el Estado de Derecho". Varias ONG y partidos acogieron ese llamado, mientras organizaciones sindicales y populares anuncian movilizaciones contra el gobierno y el Congreso, lo que abre la perspectiva de una lucha que el PST hace suya. La situación exige de parte de las centrales un plan de lucha nacional que permita que esta voluntad popular se cumpla.

La línea autoritaria del gobierno y el Congreso comenzó con la impunidad de los asesinatos, la criminalización de la protesta social y el blindaje de Dina Boluarte y muchos congresistas. Muchos creyeron que podían soportar al gobierno hasta el 2026, pero los hemos confirman que los costos son inaceptables y amenazan libertades y derechos fundamentales; la bicameralidad y la reelección de congresistas fueron impuestos contradiciendo la voluntad popular expresada en referendo; y los movimientos políticos regionales fueron inhabilitados para reforzar el monopolio de los partidos corruptos en la representación política.

El indulto a Fujimori fue otra muestra de autoritarismo. Además, el Congreso está copando otras instituciones del Estado con la finalidad de asegurar por lo menos dos de sus principales y más urgentes prioridades: 1) Impunidad en los procesos penales que enfrentan los líderes de los partidos en el poder, especialmente Keyko Fujimori, y 2) Control del próximo proceso electoral para obtener ventaja y asegurar su permanencia en el poder.

Foto: composición Bandera Socialista

Llamado de la Junta de Fiscales Supremos a rechazar el proyecto de reformas para capturar la JNJ y Ministerio Público, exige una clara política de acción sostenida y consecuente de las centrales sindicales.

El pacto de los corruptos avalado por la patronal

Los principales partidos del fujimorismo y los partidos más derechistas como principales aliados lograron alinear a otras bancadas significativas, incluidos Perú Libre y Bloque Magisterial, a cambio de concesiones menores. Es el llamado "pacto de los corruptos" que sostiene al gobierno para sostenerse a sí mismos, y cuentan con el apoyo de los sectores empresariales.

En efecto, el gobierno de los corruptos es la forma que ha tomado la política patronal por capturar completamente la conducción del Estado. Primero fueron los intentos aislados del fujimorismo de imponerse sobre el gobierno de PPK y luego sobre Vizcarra, quien más bien terminó cerrando el Congreso, aunque el nuevo Congreso logró vacarlo para imponer al gobierno usurpador de Merino que solo duró una semana, cayendo bajo una combativa movilización.

Esta correlación cambia durante el proceso electoral de 2021, cuando Pedro Castillo pasa a la segunda vuelta con un programa y un discurso que amenaza algunos cimientos del dominio neoliberal. La burguesía descarga en esa ocasión su primera ofensiva atacando la candidatura de Pedro Castillo y volcando todo su apoyo a la procesada Keyko Fujimori, y el resultado fue una derrota para ellos; la segunda ofensiva fue contra el gobierno de Castillo, primero desconociendo su victoria y luego hostilizándolo permanentemente con intentos de vacancia.

La tercera ofensiva es la que está en marcha, con la imposición a sangre y fuego del gobierno de Boluarte sin convocatoria a elecciones generales inmediatas.

Entonces, el objetivo de la ultraderecha y la patronal que la respalda es tomar el control del régimen "democrático" por la vía electoral, para imponer una situación que destrabe definitivamente los proyectos mineros y se implementen nuevas reformas neoliberales, y una represión más ofensiva, libreto que ya se experimentó en la coyuntura 2022-2023.

De vuelta a las calles

Pese a los pronunciamientos de varios partidos en defensa de la democracia no se ve hasta el momento un plan de acción concreto para hacer efectiva la caída del gobierno; el eje de su política es tocar las puertas de las instituciones internacionales y hacer llamados a la conciencia de los sectores patronales que apoyan el pacto de los corruptos, y siguen enfocados en su estrategia electoral que implica esperar al 2026.

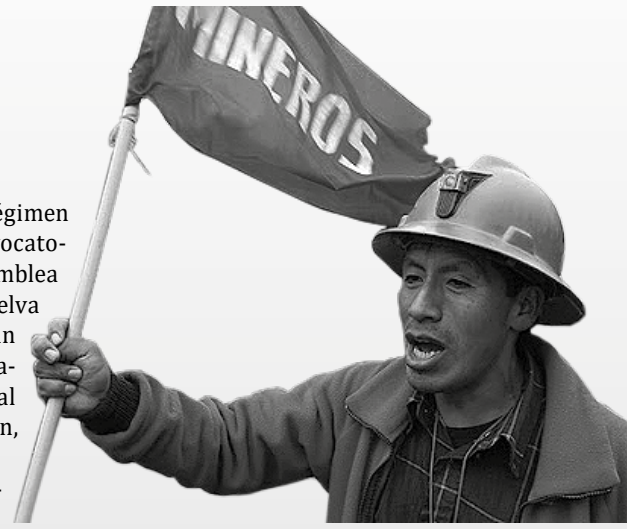
Es clave recordar que esos sectores, reformismo de izquierda y centroderechistas, tuvieron el control político después de la caída de la dictadura fujimorista, y son los responsables de haber empantanado esa revolución y mantener la Constitución de 1993, lo que hizo posible la continuidad del plan neoliberal impuesto por la dictadura. La falsa creencia de que eso iba a abonar en favor de la modernización del Estado, de la institucionalidad democrática y de los derechos democráticos de la población, fue comprobado por experiencia propia por la gran mayoría de peruanos y es justamente la causa del descontento social y la crisis de fondo.

La crisis política que se vive desde el 2016, es en gran parte la expresión del fracaso de ese proceso. Y ahora, ante el debilitamiento de aquellos sectores políticos y la ausencia de una alternativa de clase, quienes se han fortalecido con la crisis son los sectores más derechistas.

En contraste con esa política, los sectores obreros y populares vienen impulsando la lucha en las calles y anuncian reeditar la marcha de los cuatro suyos del año 2000 hasta poner fin al gobierno y el congreso. Ante esa situación, las direcciones políticas y sindicales tienen responsabilidad en viabilizar un verdadero plan de lucha nacional que haga cumplir la voluntad popular.

bandera socialista
Año XLIX - N° 144 | Julio de 2024
Publicación mensual del Partido Socialista de los Trabajadores - PST
Sección peruana de la Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional - LITci
Dirección: Av. Nicolás de Piérola 672, Oficina 407, Lima
Director: Eduardo Pflucker
Redacción: Freddy Salazar | Antonio Encinas | Víctor Montes | Manuel A. Fernández | Jack Reyes | Alex Díaz | Mauricio Meca | Miguel R.
Corresponsales: ***Arequipa***: Evaristo Checa | ***Iquitos***: Renato Achata | ***Pucallpa***: Suliana Talaverano | ***Cusco:*** Juan C. Pumaccahua
Diseño y Diagramación: Alex Díaz | **Depósito Legal:** 2004-8512

Un llamado a la rebelión



Los ataques del gobierno y el Congreso que no tienen fin y agravan la crisis nacional y la penuria que sufren las mayorías obreras y populares, causan también el regreso de las luchas. Las mayores de ellas se anuncian para el mes de julio.

En medio de infinidad de despropósitos como la que pretende impunidad para todos los criminales y corruptos y entornillar en el poder a los sectores reaccionarios, el gobierno y el Congreso ya impusieron nefastas normas antipopulares, como el DL 1620 que favorece la privatización de los servicios de agua y el alza de sus precios, y la Ley 31973 que amenaza con una mayor deforestación de la amazonia en beneficio de las multinacionales extractivistas.

Como si esto fuera poco, ante la crisis de su modelo de economía neoliberal, sumiso al capital y a los mercados extranjeros y que solo está trayendo nuevos millones de pobres, cierres de fábricas y más desocupación, ahora intentan una corrida hacia adelante forzando la salida de proyectos mineros que tienen el masivo rechazo de la población, como son los de Tía María y Conga.

Todo esto, no obstante, ya es respondido por diversos sectores que salen a la lucha en todo el país, desde los comuneros de Apurímac y Cajamarca, los pobladores del valle del Tambo, la población que se moviliza en defensa del agua y las organizaciones obreras que enfrentan los despidos, incluso enfrentando la feroz represión de Boluarte.

Pero el descontento es mayor y se extiende a todos los estratos sociales, mostrando a un gobierno y Congreso absolutamente aislados, y que coloca nuevamente en agenda la salida de adelanto de elecciones.

Ante esto la dirigencia de la CGTP, después de haber traicionado la gran rebelión del sur y luego de haber convivido con el nefasto régimen de Boluarte, ahora se ve en la necesidad de convocar a un Paro Nacional para el 19 de julio, en realidad una jornada de lucha, porque la Central no quiere ni garantiza ninguna paralización efectiva de labores, buscando apuntalar esa salida política.

Esta política, en el mejor de los casos, podrá lograr ese objetivo parcial, pero no las demandas democráticas revolucionarias planteadas en las luchas del sur y que apuntan a la derrota del régimen en su conjunto y a la convocatoria a elecciones a una Asamblea Constituyente para que resuelva la nacionalización de la gran minería y los recursos naturales, la independencia nacional y las demandas de educación, salud y vivienda.

Ahora se suma la demanda de juicio y castigo para Dina Boluarte y todos los responsables de las masacres perpetradas en ese periodo. En el peor de los casos, solo alcanzará para negociar una salida ordenada del régimen con vistas a la convocatoria a elecciones del 2026, para la que se alistan todos, incluido los que hoy fungen de luchadores.

Desde otros sectores regionales y en especial del aguerrido sur peruano, se convoca una nueva marcha hacia Lima, para protagonizar nuevas jornadas de lucha los días 28 y 29 de julio.

Ante esto, los trabajadores estamos llamados a **realizar** asambleas y **discutir** esta problemática. Hay que disponernos a participar de manera organizada y con todas nuestras fuerzas en las jornadas convocadas para el 19, 28 y 29 de julio. Hacerlo con la conciencia de que necesitamos recuperar fuerzas, poner en pie a un nuevo activismo y **recuperar** la unidad obrera en la acción. Y, discutiendo la necesidad de una nueva rebelión, en la forma de una huelga general que lleve a la derrota definitiva del régimen y a conquistar las banderas democráticas revolucionarias del sur, en la vía de una verdadera salida de fondo para los problemas nacionales y los de la clase trabajadora.

Una gran tarea para la cual necesitaremos también poner en pie un nuevo **instrumento político**, una verdadera **dirección revolucionaria** con los mejores luchadores y luchadoras, que garantice llevar a cabo dichas tareas, y en la que el PST se coloca en la primera línea.

Por una nueva dirección revolucionaria

Celebramos 50 años de nuestra fundación en un momento muy crítico para el país.

Como pocas veces ha ocurrido en nuestra historia, los trabajadores y el pueblo pobre vienen de realizar una verdadera rebelión buscando alcanzar cambios fundamentales en sus vidas, aun a costa de inmensos sacrificios. Pero la lucha fue derrotada por la traición de las direcciones nacionales, en particular de la CGTP, mostrando la necesidad de poner en pie una verdadera dirección que una y garantice el triunfo de la lucha.

Un año después, el régimen de Boluarte se descompone y se generaliza el reclamo de que se vaya con su espurio Congreso, volviendo a poner vigente las banderas con las que se levantó el sur andino. Ahora esas mismas direcciones buscan canalizar el descontento hacia la negociación de una salida electoral, es decir cambiar algo para que todo siga igual, lo que equivale a otra traición.

Boluarte y el Congreso corrupto pueden y deben ser echados y los responsables de los asesinatos deben ser encarcelados y abrirse el camino a una salida de fondo. Esta es la aspiración de la mayoría obrera y popular. Pero esta aspiración no podrá materializarse si no ponemos en pie una verdadera dirección revolucionaria que recupere la confianza de las masas en sus propias fuerzas y que sea capaz de dirigirla por ese camino.

Esta es nuestra evaluación. Y nos alegra mucho que el CONUL (Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha), el organismo que coordinó y coordina las luchas del sur, planteé esa misma proponiendo construir un **instrumento político** –y lo dice textualmente– no para las elecciones sino para encabezar esa lucha.

Nos llena de alegría porque la construcción de ese instrumento político, que es el **partido revolucionario,** ha sido la razón de nuestro combate desde hace 50 años y, más que nunca lo sigue siendo ahora que se abren mejores condiciones para avanzar en ese camino.

Un «Golpe de Estado permanente»

El Congreso aprueba nuevas leyes y proyectos que garantizan la impunidad a criminales y corruptos, benefician a grupos empresariales y asegura la continuidad en el poder de los sectores ultra reaccionarios.

Foto: Fuentes Rebelión web

Solo los pueblos organizados desde abajo, podrán enfrentar al régimen autoritario y su Congreso golpista.

A inicios del mes de junio el Ministerio Público emitió un comunicado llamando a la movilización ciudadana en defensa de la democracia, en rechazo las sucesivas leyes que viene aprobando el Congreso y que vulneran la institucionalidad, la independencia y el equilibrio de los poderes del Estado.

La bomba no estalló porque la movilización no se produjo, en parte, porque la legislatura concluía en esos días y recién se reabrirá en agosto, y en parte porque la población –hastiada de tanto estropicio–, tarda en notificarse de los alcances de las medidas que se vienen imponiendo desde arriba.

Aunque los proyectos son de diferentes signos, pero igualmente nefastos, el pronunciamiento fue motivado en especial por tres de ellos: el primer proyecto, declara en "reorganización" al Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el que el gobierno pretende tomar el control de dichos organismos, en especial de la Fiscalía de la Nación que viene investigando a Dina Boluarte y a varios mafiosos del Congreso.

El segundo, pretende reemplazar a la JNJ por una Escuela Nacional de la Magistratura, para que sea el Congreso (es decir los corruptos), quien designe a los nuevos jueces y fiscales. Y el tercer proyecto, con el que se modifica el Código Civil para que la Fiscalía deje a la Policía Nacional, un ente controlado por la corrupción, la investigación de ciertos delitos.

El pronunciamiento del Ministerio Público es potente porque es firmado por la unanimidad de los fiscales: supremos, superiores y las juntas de fiscales provinciales. No es el primer pronunciamiento, pero sí es el primero que hace un **llamado abierto** a la ciudadanía a protestar contra el régimen, hecho que motivó incluso la inmediata respuesta del mismo Congreso y agitó a la reacción, poniendo de relieve que la crisis del régimen parece haber llegado al límite.

Problemas de fondo

Hace un tiempo venimos presenciando una fuerte disputa al interior del Estado por el control del Ministerio Público que investiga las redes criminales, como los casos Los Cuellos Blancos del Puerto, Lava Jato y otros sobre lavados de activos, que directamente comprometen a ex presidentes, autoridades electas, líderes políticos de todas las tiendas y a grandes empresarios; todos con evidencias de corrupción y de organización criminal.

Por ello, hoy Alejandro Toledo se encuentra preso, igual que algunos ex funcionarios de Estado; y PPK, Ollanta Humala, Susana Villarán y Keiko Fujimori están con detención domiciliaria o comparecencia restringida a la espera de juicio, etc.

Pero de todos ellos, el de **Keiko Fujimori** es el que más roncha saca a la reacción. Su partido es el que sostiene el sistema político y es el que propició el golpe contra Castillo, puso a Boluarte en el gobierno y ahora la controla.

En el proceso que se le sigue a Keiko Fujimori el Fiscal pide su detención preliminar, y en el juicio oral que debe iniciarse el próximo mes de julio, pide una sentencia de 30 años de cárcel por organización criminal y lavado de activos.

El otro tema que agrava la crisis es la investigación que se sigue contra **Dina Boluarte** por el caso de los "Rolex" (relojes de alta gama que ella exhibe sin pudor ni justificación), y también por organización criminal, dado que, en asociación con su hermano Nicanor Boluarte, habría tejido una red de corrupción para enriquecerse y, al mismo tiempo, promover la formación de una organización política denominada "Ciudadanos por el Perú", con la intención de mantenerse en el poder.

En este último caso, la Fiscalía intervino a combazos el domicilio del hermanón en busca de pruebas y ordenó su detención junto con varios de sus cómplices, y planteó contra la presidenta una denuncia constitucional bajo el cargo agravado de obstrucción a la justicia, denuncia que ya debería haberla llevado a la destitución si no tuviera la protección de mayoría corrupta que maneja el Congreso.

De este modo, luego de la destitución de la ex Fiscal de la Nación **Patricia Benavides**, también por organización criminal, y que fue pieza clave en la persecución y cerco del ex presidente Pedro Castillo, ahora todo ese sector reaccionario pretende recuperar su control de los organismos judiciales para garantizar su impunidad y el de sus cómplices.

En lo inmediato busca la destitución de la Fiscal **Marita Barreto**, que encabeza el EFICOOP (Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder) y como tal investiga a Dina Boluarte, y se pretende la desarticulación de la DIVIAC, la fuerza policial especial que le presta apoyo, cuyo jefe, el coronel **Harvey Colchado** ya ha sido apartado y se encuentra sometido a "investigación".

Golpe tras golpe

Los estropicios del Congreso, sin embargo, van más lejos y responden a los diversos intereses que comprenden a la alianza de derecha con los grupos mafiosos que lo controlan.

Se pretende también una ley de pensiones que, ofreciendo una pensión mínima para aportantes y no aportantes, en realidad beneficia a las AFP que ya lucran con las pensiones de millones de peruanos, ahora con un gigantesco financiamiento del Estado. Se pretende investigar a las ONG que reciben financiamiento exterior y que intervienen en temas nacionales como derechos humanos, igualdad de género y medio ambiente, y que resultan incómodos para los reaccionarios que detentan el poder. Entre los afectados estarían **Ideele Reporteros** de Gustavo Gorriti, y **Aidesep**. Se pretende la captura de la **ONPE** y la **Reniec**, cuyos funcionarios no permitieron el fraude para evitar la elección de Pedro Castillo. Se pretende desaparecer a los movimientos políticos regionales para beneficiar a los partidos capitalinos.

Por último, el más graves de todos, se busca la amnistía para todos los sentenciados e investigados por "delitos de lesa humanidad", cometidos antes del año 2000, lo que no solo es una afrenta a las víctimas y sus familiares que esperan justicia, sino deja la puerta abierta para también dejar impune a los responsables de la masacre de las luchas recientes. Un hecho que incluso ha obligado a sendos pronunciamientos de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta el mismo Senado de los EE.UU.

Todo esto, cuando ya venimos sufriendo una andanada de estropicios. El Congreso aprobó la ley que recorta facultades al **Sunedu** favoreciendo a los empresarios informales que lucran con la educación. Aprobó también otra norma que restablece el Senado de la República y permite la reelección de congresistas; ambas medidas rechazadas masivamente en un referéndum realizado el 2018 y que han cambiado un 60% de la Constitución vigente; mientras se acusó de subversión a los reclamos de la población en favor de un cambio constitucional para restablecer derechos sociales. Y por último, dio luz verde al indulto al ex dictador Alberto Fujimori.

Estamos pues ante un descarado **asalto del poder** por los sectores reaccionarios y mafiosos que gobiernan desde el Congreso, y que cuentan con la complicidad de las diferentes bancadas que se llaman de "izquierda", y que obligan hasta a sectores del propio Estado, a hacer llamados a defender la democracia.

Pacto de impunidad

Por Víctor Montes

La mayoría reaccionaria del Congreso, bajo el paraguas del gobierno de Dina Boluarte, aprobó en primera instancia, el pasado 7 de junio, una Ley que determina que los delitos de **lesa humanidad** y los crímenes de guerra, pueden prescribir en nuestro país si se cometieron (convenientemente) antes de 2002.

Los autores del proyecto de Ley en cuestión, el congresista de Fuerza Popular Fernando Rospigliosi, ex ministro del interior del gobierno de Toledo y responsable por la represión durante el "arequipazo", y el congresista de la bancada Honor y Democracia, Almirante en retiro de la Marina de Guerra, José Cueto, ex Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalaron al diario Perú 21 que con esta Ley, *"...las sentencias de los militares y policías calificadas como delitos de lesa humanidad antes del 1 de julio de 2002 quedarán sin efecto y tendrán que ser corregidas…"*

Es decir, pretenden absolver por Ley a quienes fueron unos de los protagonistas del genocidio al que fue sometido el pueblo pobre del campo, particularmente el pueblo ayacuchano, durante los 20 años que duró el conflicto armado interno (1980 - 2000).

¿Quiénes quieren la impunidad?

Limpiar y liberar a los policías y militares responsables por el asesinato de decenas de miles de inocentes (como en Putis), bajo el pretexto de enfrentar al terrorismo, es un viejo objetivo de los sectores políticos más reaccionarios y conservadores del país, como el fujimorismo y Renovación Popular, y de los grandes empresarios que apoyaron a la dictadura y sus crímenes mientras esta les garantizó por la fuerza una mayor explotación y por tanto, el incremento de sus ganancias.

Igual bajo los "democráticos" Belaúnde y Alan García (1980-1990), que bajo la dictadura fujimorista, poco o nada importó a los patrones (y no les importa ahora) las 69 mil personas asesinadas durante aquellos años, o las 20 mil personas desaparecidas del conflicto armado interno.

No les importa que esté comprobado por la investigación de la CVR que el 36% de esos asesinatos y desapariciones tuvieran como responsables a miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales.

Según la CVR, los agentes del Estado fueron responsables por más de 7.300 ejecuciones extrajudiciales, así como por más de 6.400 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En realidad, lo que quiere el fujimorismo, RP y demás partidos reaccionarios, así como la patronal, es establecer un régimen en el que se reconozca su derecho a matar a quienes consideran "terrucos". Esto es, a cualquiera que consideren que pone en cuestión o amenaza sus intereses.

Foto: Archivo Caretas

Fosa común en Pucayacu.

Foto: Archivo Andina

Familiares de víctimas de masacre de Putis entierran a sus muertos tras su hallazgo en fosas comunes.

Ni olvido ni perdón

La ley aprobada por el Congreso, es un paso hacia la concreción de ese régimen de impunidad contra el pueblo pobre y trabajador que quiere la patronal y los partidos reaccionarios. La misma impunidad que Boluarte espera recibir al término de su mandato, a pesar de los 49 asesinados por la represión.

La impunidad es justamente lo contrario a la justicia. Y Con esta Ley, los deudos de casos tan emblemáticos como Los Cabitos (1983), Putis (1984), Benito Baldeón (1984), Accomarca (1985), Cayara (1985), El Frontón (1986), Bustíos (1988), Barrios Altos (1991), Madre Mía (1992) y La Cantuta (1992) quedan exentos de justicia.

La clase obrera y sus organizaciones no podemos olvidarlo. Los trabajadores y trabajadoras debemos discutir en nuestros sindicatos, barrios y lugares de trabajo, la necesidad de estar en la primera línea de la lucha contra esta ley de impunidad, encabezando la movilización de todo el pueblo, por juicio y sanción ejemplar a todos los responsables de las masacres, torturas y desapariciones, tanto ejecutivos como políticos, de la violencia política y también de los asesinados "en democracia".

No podemos ni debemos olvidar que la represión del Estado, como muestra la historia, se ceba principalmente contra quienes luchan y enfrentan la explotación y el abuso de los patrones y sus autoridades.

Así sucedió en la dictadura fujimorista, cuando la propia clase trabajadora, víctima del "terruqueo", sufrió la represión la principal del gobierno con la finalidad de destruir sus organizaciones, despedir a sus dirigentes, e imponer nuevas y mayores tasas de explotación y miseria.

Por eso, y por la solidaridad con nuestros hermanos directamente asesinados por las Fuerzas Armadas y policiales que hoy defienden a este gobierno también asesino y hambreador, debemos echar abajo dicha norma con nuestra movilización. Y para esto, debemos superar a las actuales direcciones reformistas, cómo la CGTP, quienes han abandonado la lucha en las calles a la espera de las nuevas elecciones.

LA RESPUESTA VIENE DE DENTRO

Por Víctor Montes

El reinicio de los conflictos contra la gran minería, en respuesta a la definición del gobierno de impulsar la ejecución de proyectos ampliamente rechazados por la población, como Conga o Tía María, abre la posibilidad de asestar una derrota a Boluarte y compañía en el terreno de la lucha de clases y modificar la correlación de fuerzas en favor de la clase obrera y el pueblo pobre.

Foto composición: Bandera Socialista

El rechazo de los pobladores de Arequipa y Cajamarca a los proyectos mineros Tía María y Conga respectivamente, podría ser una oportunidad para derrotar al gobierno Boluarte.

Respondiendo a las demandas las grandes mineras, y en busca de su apoyo, el gobierno de Dina Boluarte ha manifestado a los cuatro vientos su decisión de "destrabar" la cartera de inversiones mineras, comenzando por reactivar proyectos mineros ampliamente repudiados, como Conga (Cajamarca) o Tía María (Arequipa), y con esto aprovechar el contexto de alza del precio del cobre.

Esta vocación, es una declaración de guerra contra las comunidades que vienen enfrentando la explotación minera en las cabeceras de las cuenca o nacientes de los ríos, y cerca a valles de importante producción agropecuaria.

Por eso, estas mismas comunidades, organizadas en sus frentes de defensa, han salido a responder sin dilaciones las declaraciones del gobierno, anunciando su disposición de salir inmediatamente a la pelea.

Cajamarca al frente: ¡Colpayoc no va!

Cajamarca tiene una amplia tradición de lucha contra la afectación minera. Desde que en 1992, la dictadura fujimorista concesionó la actual mina de oro Yanacocha (la más importante del país), las comunidades afectadas por la contaminación del agua iniciaron su movilización convirtiéndose en referentes de esta lucha.

No resulta extraño, entonces, que sea justamente el pueblo cajamarquino el que salga de inmediato a repudiar las declaraciones del gobierno y a enfrentar a las mineras.

El pasado 10 de junio, miles de comuneros del distrito de Chetilla (provincia de Cajamarca en Cajamarca), residentes de distintos puntos aledaños al proyecto minero aurífero de Colpayoc, se movilizaron hasta la zona donde la minera viene realizando actividades de exploración (Correo Colpayoc en el caserío de Majadaspampa), intentando quemar la maquinaria con la que se hacen excavaciones para determinar la calidad del mineral que hay en la zona. En abril, una movilización similar ya se había enfrentado a quienes llevaban adelante las operaciones de exploración.

Las comunidades del distrito de Chetilla, denuncian que el proyecto se encuentra en la cabecera de las cuencas de los ríos Ronquillo, Chonta y Cushunga. Las que a su vez están relacionadas con los ríos Mashcón y luego al Río Cajarmarquino. Razón por la cual el proyecto contaminará sus principales fuentes hídricas, tal como ha sucedido con el Río Grande, que alimenta de aguas ácidas a la ciudad de Cajamarca.

Los comuneros se mantienen en pie de lucha. Por eso, los frentes de defensa de los distritos de Chetilla, Ronquillo y Cajamarca se pronunciaron públicamente en repudio al ministro de energía y minas, Rómulo Mucho, que anunció su llegada a Cajamarca para "impulsar los proyectos mineros" para el pasado 21 de junio, y a quien declararon 'enemigo del desarrollo sostenible'.

Rememorando la consigna que encabezó la lucha del pueblo cajamarquino contra el proyecto minero Conga, durante el gobierno de Ollanta Humala: ¡Conga no va!, los comuneros de Chetillo han levantado a viva voz ¡Colpayoc no va!

El Valle de Tambo vuelve a la lucha

Por su parte, la población del Valle de Tambo rápidamente realizó una multitudinaria asamblea con delegaciones de agricultores, comerciantes y ciudadanos en general de los distritos de Cocachacra, Punta de Bombón, Dean Valdivia, y Mollendo, en la que definieron reiniciar su lucha y proyectaron una acción para el 19 de julio.

La lucha del Valle de Tambo viene de 2009, y es uno de los símbolos de la lucha contra el despojo de las grandes mineras. Con su acción recurrente, la población del Valle de Tambo ha repetido una y otra vez los intentos de sucesivos gobiernos por dar pase al proyecto de propiedad de la transnacional Southern Peru Cooper Corporation.

La posibilidad del reinicio de las acciones del pueblo podría convertirse en la prueba de fuego del gobierno asesino de Boluarte. Todas las veces que un gobierno ha pretendido impulsar Tía María, se ha encontrado con la férrea resistencia del pueblo del Valle de Tambo y ha tenido que retroceder.

¿Qué debemos hacer los trabajadores y trabajadoras?

Para todos los trabajadores y trabajadoras del país el reinicio de los conflictos mineros y la posibilidad de que estos derroten la intentona entreguista del gobierno de Boluarte abre una enorme posibilidad para cambiar la dinámica de la lucha de clases, que después de la feroz represión con la que se impuso el gobierno a principios de 2023, asesinando salvajemente a 49 luchadores, ha sufrido un claro retroceso.

Los trabajadores y trabajadoras debemos, por eso, apoyar solidariamente esa lucha y movilizarnos contra la represión que el gobierno pueda desatar en Cajamarca, Arequipa, y donde sea que pretenda imponer el saqueo de nuestros recursos.

Sin embargo la movilización no

puede tener solo un carácter solidario. La lucha de las comunidades campesinas e indígenas contra la explotación minera tiene un poderoso trasfondo: la lucha contra el dominio imperialista de nuestros recursos, amparados en el modelo económico neoliberal, y la lucha contra la destrucción de los ecosistemas que permiten su subsistencia. Por eso, para la clase obrera, estas luchas plantean el enorme reto de tomar las banderas de las poblaciones afectadas, campesinas e indígenas, como propias y luchar codo a codo. Comenzando por exigir el respeto irrestricto a la consulta previa, de carácter vinculante, de las comunidades que se verán afectadas por la acción minera, petrolera y forestal.

Solo desde esta posición, es posible que la clase obrera se convierta en dirección de todo el proceso para encaminarlo a la única salida de fondo con la que podemos garantizar las exigencias de esas mismas comunidades: conformar un gobierno de los trabajadores y trabajadoras, campesinos, pueblos indígenas y todo el pueblo pobre.

Como ya dijimos, la lucha de las poblaciones contra la minería es la expresión de la lucha del pueblo contra el saqueo imperialista que solo deja miseria y destrucción del ambiente, lo que hace imposible a las comunidades campesinas e indígenas a retomar su actividad económica fundamental una vez concluida la extracción minera.

Por eso, en lo fundamental tanto las comunidades que se oponen al inicio de nuevos proyectos mineros, sobre todo aquellos que afectan la producción agraria, y los trabajadores y pueblo pobre de la ciudad, enfrentamos al mismo enemigo. Un enemigo que tiene en el gobierno de Dina Boluarte a su principal agente, dispuesta a imponer a sangre y fuego la continuidad del saqueo de nuestros recursos.

Por eso, junto a la paralización de los proyectos mineros en cuestión, es imprescindible luchar por la expropiación sin pago de las mineras que ya están operando, para ponerla bajo control de sus trabajadores y trabajadoras, y así, de la mano con las comunidades, poner esos recursos a su servicio y planificar la mitigación del impacto de las actividades mineras.

Resulta por esto imprescindible que junto a las demandas de la clase trabajadora y la lucha contra el avance reaccionario de las leyes que aprueba el Congreso, la lucha contra el inicio del proyecto Tía María, la lucha contra la exploración en Colpayoc, contra Michiquillay y el proyecto Conga, se convierta en la lucha nacional, de todos los trabajadores y trabajadoras del país, por la derrota de Boluarte, el Congreso y contra el imperialismo.

Empieza la lucha contra la privatización del agua

Por Alex Díaz

A fines de mayo el Congreso aprobó el Decreto Legislativo 1620, Ley de Acceso Universal al Agua Potable (LAU), que faculta a los gobiernos regionales y locales a promover la **inversión privada** en las fuentes naturales de agua superficial y subterránea mediante la modalidad de "Obras por Impuestos" (OxI) y de otros mecanismos de participación público y privada.

Este mismo decreto también faculta a la SUNASS a presentar un plan de **aumento progresivo** de la tarifa de consumo durante dos años, es decir al año 2026.

La nueva ley fue aplaudida por el gobierno Boluarte, cuya ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, considera que "es una ley histórica y única", pues sería "la primera vez que un gobierno se preocupa por los que no tienen agua" (sic); y para tal objetivo aplicarán "soluciones no convencionales".

No es la primera vez que un gobierno promete resolver la necesidad de agua potable a los pobladores que viven en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema. En el 2006 Alan García en su campaña presidencial lanzó el programa "Agua para todos", con el que ofreció que el 95% de limeños tendría agua potable, pero no cumplió su promesa. Hoy nos venden humo y pretender hacernos creer que ahora sí se resolverá esta necesidad básica que afecta a más de tres millones de peruanos/as.

La privatización de las fuentes naturales de agua

La nueva ley plantea dos reformas estructurales. Primero, si en el pasado la brecha en infraestructura era financiada por el Estado, el D.Leg 1620 propone que **la inversión será asumida por empresas privadas o las Asociaciones Público – Privadas (APP)**, con un contrato de **concesión por más de 20 años**. De este modo el Estado abandonaría su rol social para entregarlo al capital privado que tiene como fin el lucro. Les cede también la función de distribución y comercialización del agua potable.

Recordemos que en la década del 90, bajo la dictadura fujimorista, miles de millones de dólares se dilapidaron en los remates de las empresas públicas de energía, telefonía y demás empresas estatales, privatización que significó deterioro de servicios al público y alzas de tarifas. Y a partir del 2001 bajo los gobiernos "democráticos" de los últimos 24 años, se agravó la prestación de los servicios públicos, destruyéndolas y convirtiéndolas en botín de privados y fuente de corrupción de los partidos gobernantes y sus funcionarios.

El Estado abandona su rol social al ceder a las empresas privadas la inversión y control del agua para que lucren con la necesidad de agua potable de los más pobres.

Demás está decir que las consecuencias de este cambio perjudicarán a las comunidades campesinas e indígenas que tendrán que pagar el agua que utilizan para la irrigación de sus tierras, aumentando los costos y precios agropecuarios.

Incremento de tarifas de consumo

Segundo, afectará a los usuarios que ya tienen instalación domiciliaria de agua potable. El decreto propone financiar el costo de las obras con el **aumento de la tarifa de consumo**.

Dice la ministra: *"Gran parte del financiamiento de estas soluciones no convencionales se darán a través de un **subsidio cruzado**, es decir, el costo del servicio será **asumido por quienes ya tenemos el acceso a agua potable**"* y se aplicará a los que *"más consumen"* y tienen *"mayores ingresos" (¿?) ...* y que *"el incremento de la tarifa del servicio de agua –en términos monetarios– representa solo entre 0.50 céntimos y S/. 1.50 al mes… que es el costo de una botella de agua"* (¿?).

Sigue: ese subsidio *"representará hasta un 3% en el caso de los domicilios y hasta un 4% en el caso de los no domiciliarios, es decir, industrias, empresas, entre otros"*. Y que irán al Fondo de Inversión de Agua Segura (FIAS). Con ese dinero *"se podrá desarrollar en los próximos cuatro años, de manera progresiva y escalonada, que 3,15 millones de personas puedan acceder al agua"*. Es decir, utilizarán un criterio parecido al Fondo de Compensación Social Eléctrica o (FOSE) o un Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) que se aplica en el servicio de energía eléctrica.

Para Luisa Eyzaguirre, dirigente del Sindicato de Sedapal, es otra mentira del gobierno Boluarte porque abiertamente promueve la privatización, bajo la modalidad de concesión, entregando a las empresas privadas los sistemas hídricos y cuencas de agua (manantiales, lagunas, ríos y aguas de lluvia o captadas de la niebla), y que al estilo chileno, afectará profundamente los pastizales, a los agricultores y a los consumidores de agua, en especial a los que tienen poco acceso a los servicios de agua y desagüe.

Eyzaguirre, denuncia que la ministra Pérez de Cuellar ha cometido un acto inmoral de incompatibilidad de funciones e intereses, pues mientras ejercía el cargo de ministra de Estado presidía la Cámara de Comercio e Industria Peruano Francesa, institución donde están las multinacionales francesas interesadas en adueñarse del agua peruana, como Vinci, Suez y Veolia.

La respuesta popular

Dos importantes movilizaciones denominadas Marcha Nacional Contra La Privatización del Agua, convocadas por el Frente de Defensa del Agua y la Vida, congregaron a más de 20 mil personas exigiendo la nulidad del decreto 1620 y censura de la ministra Hania Pérez de Cuellar.

Por todo lo dicho, bienvenida sean todas las movilizaciones en defensa del agua y la vida, pero no bastan para derrotar el decreto 1620. Esta dura pelea debe involucrar a todos los sindicatos del agua, a la clase obrera y las organizaciones vecinales y populares, esto es una **lucha unitaria a escala nacional** que debe ser asumida por todo el pueblo.

También significa luchar por reflotar las empresas públicas de agua y desagüe a escala nacional, exigiendo su desburocratización y modernización, y que estas pasen bajo control de los trabajadores y usuarios, representados por sus organizaciones sindicales, vecinales y comunidades campesinas e indígenas.

La clase obrera ante el desafío de responder los despidos

Escribe Manuel Fernández
Dirigente obrero del PST

En Celima arrancamos el año con el aviso que los almacenes de productos terminados se encontraban en sobrestock, pese a las paradas de planta que se habían sucedido el año anterior. No demoró mucho para que la patronal decidiera paralizar algunas líneas de producción en la sede de SMP y luego convocar a los trabajadores de esas líneas para comunicarles que "ya no hay trabajo", chantajeándolos a aceptar un acuerdo de retiro voluntario bajo la amenaza de ser despidos.

La información cayó como bomba entre los trabajadores afectados, la mayoría sindicalizados, y creó un ambiente de derrota entre ellos. La noticia rápidamente corrió por toda la planta.

Sin embargo, también surgió una rápida respuesta desde el sector de trabajadores con más experiencia y largos años de lucha. Ellos promovieron reuniones en puerta de fábrica para discutir la problemática, y tomar conciencia de la necesidad de **defender** los puestos de trabajo y se pusieron en pie de lucha. Lograron también empujar a la dirección sindical a convocar una **asamblea general**, en la que también lograron que se resuelva **romper la negociación colectiva** en trato directo y preparar la **huelga** como respuesta a la amenaza de despidos.

La siguiente asamblea no ratificó este acuerdo porque la directiva se preparó para revertir el acuerdo anterior. Para ella se trataba, y se trata, de priorizar la continuidad del diálogo con la empresa con la esperanza de alcanzar una solución al Pliego de Reclamos, a expensas de dejar que corra los planes de despido de la empresa. ¿De qué valen los supuestos aumentos si un gran sector de trabajadores no podrá gozar de ellos? Aún peor: ¿si la patronal está aplicando un plan de despidos masivos, no es absurdo esperar que te ofrecerá aumentos satisfactorios?

En todo caso, por encima de cualquier pretensión reivindicativa, no hay nada más importante y sagrado que defender los puestos de trabajo cuando estos son amenazados.

Como era de prever, el problema se agravó. Ahora circula la información que la sede de SJL cerrará sus operaciones este año dejando a **250 trabajadores** en la calle. Esto sucede mientras la directiva sigue "dialogando" con la patronal, no solo sin lograr ninguna solución al Pliego sino atándose las manos para no hacer nada.

En la planta de SMP donde se anularon líneas de producción, gracias a la firme respuesta de la base logramos que todos los trabajadores afectados fueran reubicados, en la misma planta o en otras sedes. Se trata de seguir este camino.

Los despidos y amenazas están a la orden del día en otros centros laborales. Las patronales defienden sus tasas de ganancias haciendo pagar a los trabajadores las consecuencias de la "crisis", y donde pueden los echan masivamente a la calle, en otros disfrazan los despidos con invitaciones al retiro, no sin antes desplegar una política de hostigamiento para que acepten este final. Debemos definir que ante esto hay que salir a luchar.

El problema de la normalidad de los despidos

Muchos compañeros, presos de la presión patronal y la ausencia de una respuesta de sus dirigentes, terminan aceptando los despidos y renuncias "voluntarias". Dicha política es la que se impone desde la CGTP y la FETRIMAP, que enfocan el problema como un tema solo legal, creando expectativas en las resoluciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo y, en últimas, del Poder judicial, que demoran años, en lugar de la lucha.

La lucha legal no es un aspecto que se deba subestimar. Pero sin organizar la respuesta unida de los trabajadores en defensa de su derecho al trabajo, no hay lucha legal que valga. Los despidos o los cierres de fábricas (y plantas) por temas económicos u otros pretextos pueden cubrirse de falsa "legalidad". Pero ante ellos lo que siempre debe primar es la defensa del derecho al trabajo, para obligar al patrón a respetarlo.

La patronal defiende sus ganancias echando trabajadores. Los trabajadores debemos defender nuestro derecho al trabajo, que es un derecho humano porque garantiza el mínimo sustento de nuestras familias. Y este derecho no se regala sino se defiende.

Por ello, ante la arremetida de la patronal de Celima hay que luchar, haciendo honor a nuestra trayectoria y como ejemplo para toda la clase trabajadora.

La violación no es una "práctica cultural"

Por Víctor Montes

La declaración por parte del ministro de educación, Morgan Quero, con el apoyo de Ángela Hernández, ministra de la mujer y poblaciones vulnerables, de que la violación de más de 500 niños y niñas awajún de la provincia de Condorcanqui, Amazonas, por parte de sus docentes, sería una "práctica cultural en la amazonía" vuelve a poner en la mesa incapacidad del gobierno y el Estado para poner fin a la violencia sexual en el país.

Dichas declaraciones han encendido la indignación en el pueblo awajún. La docente y presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc, reveló a RPP que existe un registro de 524 acusaciones

formales contra docentes por abuso sexual a menores de la comunidad. Desde 2010 se denuncian estos actos ante la UGEL, pero solo 111 profesores fueron destituidos de sus cargos hasta el presente año, mientras que los otros acusados continúan en las aulas con menores. Misteriosamente, la UGEL afirmó haber sufrido un incendio en 2020, que provocó la pérdida de todos los expedientes y pruebas que correspondían a las denuncias.

Sin embargo, lo que más debe despertar indignación, además del silencio cómplice y aberrante de la FENATE y el SUTEP, es la **normalización** de la violencia sexual de parte de autoridades que deberían velar por la integridad física y psicológica de niños y niñas en las aulas y en todos los ámbitos de la vida. Peor aún cuando quien ejerce dicha violencia, es una maestra proveniente, en su mayoría, de otros pueblos y ciudades, y que justamente pretenden aprovechar esa mirada discriminadora y estereotipada de la sexualidad en los pueblos nativos, para violar impunemente.

El movimiento de mujeres denuncia que el Perú es un "país de violadores". Y no cabe duda que la barbarie capitalista que vivimos perpetúa la violencia machista y nos degrada sistemáticamente. Pero que se justifique desde las máximas autoridades del país, con el silencio complicado de las dirigencias sindicales, es solo la prueba de que la única forma de poner fin a este flagelo es echando abajo justamente a esas autoridades y a toda la podrida democracia, que no puede terminar con la violencia machista, los abusos, desapariciones y violaciones, pero asesina a quienes enfrentan su podredumbre en las calles.

Una 'democracia' y un gobierno que resguarda a abusadores sexuales en las escuelas, más aún si estas se encuentran en el interior del país, y más, si son poblaciones nativas, esos "ciudadanos de segunda clase", según el impune Alan García.

Un Estado al margen de la situación crítica de la mujer

Según la Defensoría del Pueblo, de enero a mayo de este año, de las 4.434 mujeres reportadas como desaparecidas solo 2.431 fueron ubicadas, siendo el 55% de estas personas niñas y adolescentes. Estas alarmantes cifras siguen mostrando la cruda realidad cuya responsabilidad principal es del Estado y Gobierno, más preocupados en asegurar y agendar los intereses empresariales y los suyos que los de la población.

La Defensoría del Pueblo, en el reporte "Qué pasó con ellas", correspondiente al mes de mayo de 2024, informa de la desaparición de un total de 2695mujeres, lo que representa un aumento del 10 % comparado al mismo periodo del año 2023 en el que se reportaron 2445 alertas.

Asimismo, durante el 2022, se reportaron 137 casos de feminicidio en el país, de los cuales 22 tuvieron como situación previa una desaparición, es decir, el 16 % de los casos. Para el 2023, estas cifras aumentaron a 150 feminicidios reportados, de los cuales el 21 % de los casos tuvieron denuncias previas de desaparición.

Los casos de desaparecidos/as es alarmante, sobre todo de niñas y adolescentes en el Perú.

La falta de presupuesto y de acción

Si bien en los últimos años hubo ligeros aumentos de presupuesto para el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), esto no cubre toda la problemática de prevención y de acción frente a los casos de desaparición y de feminicidio que siguen en aumento. El presupuesto apenas asegura los programas sociales de prevención, la continuidad de los 433 Centros de Emergencias Mujer (CEM) y los precarios Hogares de Refugio Temporal.

Así inclusive lo expresó Julio Guzmán, procurador púbico, señalando que cada año iba incrementándose, por ejemplo, en el ámbito ambiental, el número de casos de minería ilegal en el país, pero no el número de fiscales ni el equipo que se necesitan para enfrentar esta problemática. Esta misma situación se repite en todos los sectores. De ahí que muchísimos casos duren meses y hasta años mientras los abusadores están libres y continuando la violencia hacia otras mujeres, así como el escandaloso caso de la violación de más de 500 niños y niñas awajún del Amazonas, por parte de sus docentes.

Impulsar la lucha contra la violencia y opresión

Esta grave problemática de la mujer es evidente que no es una prioridad para los principales "representantes" del país, como el Congreso, que se dedica a legislar y actuar a favor de la impunidad y la corrupción y a controlar el sistema judicial. Al igual que el gobierno, dedicado a mantener la sumisión del país a garantizar las ganancias de las multinacionales, evitar a la justicia y seguir pactando todo lo posible con el podrido Congreso para llegar a las elecciones 2026.

Por ello necesitamos impulsar nuevamente la lucha en las calles, como el movimiento "Ni una menos" a nivel nacional. Pero esta vez debemos impulsarlo con un carácter político y combativo para poder luchar de verdad contra todo este régimen corrupto e incapaz de solucionar demandas tan críticas que oprimen especialmente a las mujeres más pobres del país. Necesitamos discutir este problema en nuestros organismos de base de las fábricas, barrios, universidades, y crear y unificar las demandas específicas con las nacionales para poder vencer y, en ese proceso, construir una nueva dirección política.

La marcha por el Orgullo LGTB+

Por Víctor Montes

El 28 de junio se conmemora, en el mundo, la revuelta de Stonewall (Nueva York - 1969). Revuelta que dio nacimiento al 'Día del orgullo.'

El epicentro de este movimiento fue Stonewall Inn, un bar frecuentado por gente que, como se describió en su momento, "no tenía nada que perder": jóvenes expulsados de sus casas por ser gays, travestis, transexuales y drag queens, muchas de ellas afroamericanas y latinas.

Aquella noche del 28 de junio, se realizó una redada policial dirigida a las personas LGBT+ que se encontraban bailando y disfrutando de la madrugada.

Durante cuatro días, una cantidad creciente de personas (lesbianas, gays, bisexuales y travestis, transexuales y transgénero), que llegaría a los miles, se enfrentaron a la represión policial. Tomaron las calles y levantaron barricadas en una verdadera rebelión contra la discriminación y violencia ejercida contra la comunidad LGBT+. Con su acción, se ganaron un lugar en el movimiento social y el derecho a conmemorar el orgullo de ser y vivir con libertad su sexualidad y su identidad, como cualquier persona.

Pero no fueron los ricos de Nueva York quienes salieron a las calles, aquel 28 de junio. No fueron los gerentes y empresarios o empresarias homosexuales quienes pusieron el pecho y el rostro a los garrotes policiales. Fueron los pobres y marginados de la sociedad. Los trabajadores y trabajadoras que debían esconder sus preferencias sexuales e identidades de género en los trabajos para sobrevivir, o, peor aún, quienes eran condenados a la prostitución, justamente por ser pobres y homosexuales.

En Lima, tuvo que pasar 43 años para que se convocara a una marcha por el Orgullo LGTB+. Y desde entonces, año a año la acción congrega a miles de personas que, siendo o no parte de la comunidad, entienden que la lucha por la igualdad de derechos, sin importar la opción sexual o la identidad de género, es uno de los pilares más elementales de la vida en democracia.

Sin embargo, esta democracia podrida se ha mostrado incapaz de garantizar dichos derechos para la población LGTB+, y mucho menos a la población obrera y pobre que hace parte de dicha comunidad.

Foto: Archivo La República

Y menos aún, la democracia dirigida por Boluarte y el Congreso, que acaban de dar un salto de 40 años al incluir en el manual de enfermedades mentales a la población transgénero.

Por eso es importantísimo sumar la lucha de la población LGTB+ a la lucha contra el gobierno, y así mismo, se hace urgente darle un carácter de clase a la lucha de la comunidad LGTB+. Porque frente a la explotación y la pobreza, somos exactamente iguales. tenemos el derecho y la necesidad, de conquistar plena igualdad para todos, todas y todes.

La causa palestina, es también nuestra causa

Por Mauricio Meca

Foto: Archivo de Bandera Socialista

El PST presente en la jornada de solidaridad con el pueblo palestino.

Foto: Cortesía RandyGo

***Ayacucho**: Jóvenes manifestando su solidaridad con Palestina.*

Por décadas varias generaciones de peruanos han sido testigos de la barbarie fascista del sionismo y con rabia e indignación han sido capaces de movilizarse y pronunciarse contra ella. Hoy, una vez más, frente a un genocidio televisado, se ponen de pie cientos de jóvenes y se renueva la esperanza de acabar para siempre con el colonialismo israelí y por alcanzar la independencia de Palestina, del rio al mar.

Juventud norteamericana a la vanguardia de la solidaridad internacional

La entrada en escena de la juventud universitaria de los Estados Unidos en apoyo a la causa palestina es un hecho nuevo desde la creación del Estado de Israel. Estudiantes de las universidades más prestigiosas, como Harvard, Emory, Yale, Columbia, Texas, etc.; han protestado contra el genocidio en Gaza, y en más de 40 campus universitarios se han hecho acampadas, las cuales han tenido que resistir una fuerte represión con detenciones, amenazas y torturas por parte de la policía. Estos acontecimientos traen a la memoria las campañas de la juventud estadounidense contra la guerra de Vietnam y contra el apartheid en Sudáfrica, y se ha convertido en un hito de la solidaridad mundial con la lucha del pueblo palestino.

El método con el cual han organizado este tremendo movimiento de solidaridad se basa en asambleas democráticas, mostrando que no se puede sostener acampadas de tal magnitud sin lograr involucrar al estudiantado, hacerlo participe en la toma de decisiones y respetando su voto en las asambleas.

La solidaridad en el Perú

El movimiento universitario peruano no es ajeno a esta oleada de protestas. Desde hace un mes se ha conformado el espacio Estudiantes por Palestina, formado principalmente por activistas de la Universidad de San Marcos y la Universidad Católica, y activistas de Bellas Artes y Villarreal, con el propósito de difundir la problemática en la población estudiantil y lograr su adhesión y solidaridad.

Hasta el momento se han realizado jornadas de solidaridad (actos culturales, banderolazos, eventos) en San Marcos, la PUCP y la UNI. Cabe señalar que, Jeri Ramón, rectora de San Marcos, impidió el ingreso del embajador de Palestina para un evento que se había programado el 15 de mayo, por los 76 años de la Nakba. Ella también avaló el ingreso de la policía para desalojar a los manifestantes venidos de provincias para protestar contra Dina Boluarte; es decir, una aliada del régimen sangriento y corrupto de Boluarte y del fascismo del Estado de Israel.

En otras partes del país, como en Arequipa, se han realizado plantones en la Universidad San Agustín. En Cusco y Ayacucho diversos colectivos han organizado actos en plazas.

Tenemos que rescatar el ímpetu solidario y revolucionario de la juventud universitaria que sin lugar a dudas es un faro de esperanza en medio de la tragedia palestina. Sin embargo, es importante señalar que los espacios precisan de una mayor participación estudiantil, con el ejemplo de los universitarios de los EEUU.

Urge la coordinación con todos los espacios políticos y gremiales (aulas, especialidades, bases, centros de estudiantes, centros federados y FUSM), para que se extienda la solidaridad con Palestina y por el boicot y la ruptura de relaciones con Israel.

¿Están Israel y Hezbollah al borde de una guerra generalizada?

Por Fabio Bosco

El 18 de junio, Israel anunció sus planes de invadir el Líbano, sin presentar plazos. El mismo día, el diplomático estadounidense **Amos Hochstein** se reunió con el primer ministro libanés **Najib Mikati** y el presidente del parlamento, **Nabih Berri**, y envió un mensaje a Hezbollah: en cinco semanas, las tropas israelíes concluirán la ofensiva sobre Rafah y comenzarán una ofensiva limitada contra Hezbollah en el Líbano, con apoyo de Washington, y que, por lo tanto, es mejor buscar una negociación con Israel.

Hezbollah publicó imágenes detalladas de la ciudad de Haifa, su puerto, unidades militares y de la industria bélica, tomadas por un dron que apunta estar preparado para un ataque mortal contra Israel. El día 20, su líder **Hassan Nasrallah** explicó que si Israel lanza un ataque en gran escala contra el Líbano, Hezbollah responderá sin reglas ni límites, a diferencia de lo que ha hecho hasta ahora. Finalmente, afirmó que Hezbollah cesará los ataques contra Israel tan pronto como haya un alto el fuego en Gaza.

Sin embargo, la verdadera intención de Hezbollah es **evitar** cualquier expansión del conflicto hoy. La prioridad regional de Hezbollah es la **defensa** de régimen iraní y no de los palestinos o incluso de Hamás.

Por otro lado, el comando militar israelí entiende que es necesario invadir el Líbano para expulsar a Hezbollah de la frontera. Esta opinión cuenta con el apoyo de 65% de la población judaica israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu necesita algo para llamar de victoria, ya que el genocidio en Gaza es un desastre que no sólo ha hecho que Israel pierda la batalla por los corazones y las mentes en todo el mundo, sino que también divide al propio gobierno israelí y lo pone en conflicto con el comando militar.

El portavoz de las fuerzas armadas israelíes, **Daniel Hagari**, criticó públicamente al gobierno israelí por no tener un plan para Gaza tras la ofensiva de Rafah. Para los militares, la falta de una definición estratégica para Gaza plantea dos horizontes indeseables: un costoso control militar frente a la hostilidad de la población y acciones guerrilleras de la resistencia palestina, o una administración de Hamás como era antes del 7 de octubre.

Los militares **apoyan las propuestas de la administración Biden** de reemplazar la ocupación militar israelí de Gaza con soldados de los países árabes aliados con el gobierno colaboracionista de la Autoridad Palestina, que estarían a cargo de eliminar la resistencia palestina, tal como lo hacen en Cisjordania en cooperación en materia de seguridad con el Estado de Israel.

Los militares no están satisfechos con la exención hecha por el gobierno del servicio militar obligatorio para los judíos ultraortodoxos, que la mayoría de la población considera un privilegio inaceptable. Pero la permanencia del gobierno de Netanyahu depende de su alianza con los dos partidos que representan a los ultraortodoxos, además de los partidos que representan a los colonos de ultraderecha (que son llamados terroristas judíos por los propios servicios de inteligencia israelíes).

Netanyahu ve en la invasión del Líbano una posibilidad de presentar una victoria para la población israelí, ya que en Gaza las tropas israelíes cometieron muchas atrocidades que representan un genocidio, pero no logran eliminar a los líderes militares de Hamas ni destruir completamente sus capacidades militares, lo cual es visto como una derrota.

El gran obstáculo para la invasión del Líbano es la **resistencia libanesa**, que ya expulsó a las fuerzas israelíes después de 18 años de ocupación en el año 2000, y la posición del imperialismo occidental, en particular del gobierno estadounidense, que trabaja para impedir la **expansión del conflicto** a Medio Oriente.

Lea en texto completo en:
https://litci.org/es/estan-israel-y-hezbollah-al-borde-de-una-guerra-generalizada/

Aumenta la crisis del sionismo y crece el apoyo a la resistencia armada en la Palestina ocupada

Escribe Soraya Misleh
PSTU Brasil

Mientras Israel camina a grandes pasos para ocupar el merecido puesto de Estado paria, el pueblo palestino enfrenta un sufrimiento atroz, pero se mantiene firme y confiado. Estos son los informes procedentes de la Palestina ocupada. Un retrato de esto es el aumento del apoyo a la resistencia armada.

Al derramamiento de sangre impuesto al pueblo palestino desde Gaza hasta Cisjordania y la Ciudad Vieja de Jerusalén, la respuesta de quienes no tienen nada que perder se refleja en una encuesta realizada por el Centro Palestino de Investigación Política y Pesquisa, entre el 26 de mayo y el 1 de junio: 54% de los entrevistados en Cisjordania y la Franja de Gaza defienden este camino para poner fin a la ocupación sionista. La encuesta también refleja optimismo sobre la caída del criminal Netanyahu, pero la mayoría no tiene ilusiones sobre las negociaciones con un nuevo gobierno sionista.

Hay una disminución en la creencia de que la perspectiva de "dos Estados" sería la solución, y un creciente repudio al gerente de la ocupación sionista, la Autoridad Palestina: "Poco más de la mitad cree que Hamás es el que más merece representar y dirigir al pueblo palestino hoy, mientras sólo 16% cree que Fatah, bajo el liderazgo de Abbas [Mahmoud Abbas], es el más merecedor". 94% de los habitantes de Cisjordania y 83% de los de Gaza exigen la dimisión del presidente Mahmoud Abbas.

Una de las razones se explica en un informe de Middle East Eye: el "profesionalismo" de las fuerzas policiales y de inteligencia de la Autoridad Palestina, como parte de la cooperación de seguridad con Israel, para reprimir la resistencia en Cisjordania, incluso en medio del genocidio y la profundización de la limpieza étnica.

La investigación se llevó a cabo en medio de más y más crímenes contra la humanidad, en una escalofriante colección de masacres que componen el genocidio en Gaza y frente al creciente derramamiento de sangre en Cisjordania, que enfrenta una limpieza étnica avanzada. Hasta el 19 de junio, sin contar las miles de personas desaparecidas bajo los escombros, hay más de 37.000 palestinos asesinados en Gaza y más de 85.000 heridos, 70% de los cuales son mujeres y niños. En Cisjordania y la Ciudad Vieja de Jerusalén, desde inicios de octubre de 2023 son más de 520 muertos, entre ellos más de 130 niños. Israel está siendo incluido día tras día en las listas sucias de las Naciones Unidas (ONU), entre los mayores violadores de niños del mundo, entre las fuerzas de ocupación más criminales, etc.

***CRECE EL APOYO**: No hay país donde los jóvenes repudian el genocidio y los crímenes de guerra del gobierno israelí contra los palestinos.*

Además de las acusaciones, la búsqueda por Israel de una "solución final" enfrenta a un pueblo cuya perspectiva histórica es la liberación. "Por aquí pasaron muchos ocupantes, ninguno logró quedarse. Y ningún imperialismo dura para siempre". Esta es una frase común entre los palestinos, enseñada de generación en generación.

La resistencia heroica e histórica sigue viva y no se curva. "Si uno de nosotros es eliminado, otros diez deben venir en su lugar. Esta es la marca genuina de nuestra lucha, y ni la censura ni la simple complicidad cobarde podrán apagarla", había revelado ya el intelectual palestino Edward Said (1935-2003). La máxima del revolucionario marxista palestino Ghasan Kanafani sigue vigente: "Con sangre escribimos por Palestina".

Aislamiento y crisis

La máscara cae. El espantoso rostro del Estado sionista está expuesto y el aislamiento internacional se profundiza. En el Brasil sigue planteada la exigencia de que Lula rompa inmediatamente las relaciones económicas, militares y diplomáticas con el genocida Estado de Israel.

En medio de este proceso en el que la solidaridad internacional no da tregua, Estados Unidos enfrenta su propia crisis. Con las inminentes elecciones presidenciales este año, el imperialismo estadounidense está tratando desesperadamente de tapar el rostro del monstruo que alimenta. Para intentar salvar el proyecto colonial, puede arrojar a Netanyahu a los leones –en medio de fricciones internas, que incluyen la disolución del "gabinete de guerra" por parte del criminal primer ministro después de que el líder sionista Benny Gantz abandonara esa coalición–. Gigantescas movilizaciones dentro de Israel exigen la cabeza de Netanyahu, no por preocupación con las vidas palestinas, sino porque entienden que el proyecto sionista está amenazado. Netanyahu corre el riesgo de perder su cargo y ser arrestado, y responde amenazando con una guerra total contra el Líbano. Así, cada día cava su propia tumba.

Estados Unidos busca un acuerdo de alto el fuego que preserve su enclave militar y está entre las posibilidades un plan de que la pos Gaza coloque a la estrecha franja en manos de la Autoridad Palestina, impopular y mal vista por los palestinos. Para ello se está considerando su "revitalización" y "reforma". Y, hasta que la Autoridad Palestina pueda asumir la franja, la instalación de fuerzas de paz de las Naciones Unidas en Gaza –como propuso la Liga Árabe en mayo, con la presencia de Abbas, en la misma reunión en la que condenó "vehementemente" el bloqueo y los ataques a navíos comerciales por parte de los huíes de Yemen en el Mar Rojo y el Golfo de Adén.

Estas fuerzas internacionales de paz son rechazadas por la resistencia, que entiende que también les pondrían un blanco de tiro en la espalda. El peor de los mundos en la lucha por la liberación, tras el urgente alto el fuego, sería que Estados Unidos pusiera sobre la mesa un nuevo acuerdo de Oslo, que no representó para el pueblo palestino más que otros 30 años de paz de los cementerios y avance en colonización y limpieza étnica de sionistas, mientras se creaba una nueva clase capitalista dependiente de la ocupación.

Es necesario observar el movimiento entre los enemigos históricos de la causa palestina, identificados por Kanafani: además del imperialismo/sionismo, los regímenes árabes y la élite reaccionaria árabe-palestina.

El mejor de los mundos es la profundización de la derrota política de Israel, que señala una victoria de la resistencia. El caso es que la imposibilidad de eliminarla se escribe todos los días. El pueblo palestino tiene una certeza: no perdonará, no olvidará, no será borrados del mapa. Y nunca se doblegará. Hacia una Palestina libre, del río al mar.

Traducción:
Natalia Estrada.

ARGENTINA

Abajo la Ley Bases y el plan de Milei

Escribe Dirección Nacional del PSTU-Argentina

El Gobierno viene acumulando escándalos. Desde la escasez de gas hasta los alimentos almacenados que no son entregados a los comedores populares, mientras vencen. Pero Javier Milei y compañía insisten en mostrarse triunfantes, dando estadísticas difíciles de chequear, y prometiendo resultados en el corto plazo.

La llamada "desaceleración" de la inflación parece haber alcanzado su techo. Con un dudoso 5% de inflación mensual, más toda la pérdida acumulada del poder adquisitivo, garantizar el alimento se vuelve cada vez más dificultoso para las familias obreras. A esto le sumamos el aumento en las tarifas desde junio y en el transporte que se vienen a futuro. También aumentan los crímenes de odio, como el lesbicidio en Barracas, que se llevó la vida de tres compañeras.

Hace un mes tuvimos la gran marcha educativa, después del paro contundente de la CGT. La provincia de Misiones se incendió al empalmar el conflicto estatal con un levantamiento de la Policía. Sin embargo, hoy la victoria parece lejana. El ajuste nos sigue golpeando. La Ley Bases está por ser discutida en el Senado (y probablemente aprobada). Y el Gobierno sale a la caza de las organizaciones sociales, llegando al punto de allanar el local del Partido Obrero. Todo mientras la Justicia persigue a luchadores como nuestro compañero Heber Hernández.

¿Cómo llegamos hasta acá?

Está pregunta nos la hacemos día a día entre quienes compartimos la trinchera contra el Gobierno. Y es lógico que sea así. Con ajuste violento, pero mucho menor al que sufrimos hoy, corrimos a botellazos a la burocracia de la CGT en el 2017, porque no ponían fecha de paro. Y meses más tarde, tuvimos una batalla campal en Plaza Congreso contra la Policía, mientras se votaba la Reforma Jubilatoria.

En el medio tuvimos el Gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el cual despertó expectativas en muchos de los sectores que venían de enfrentar a Mauricio Macri. Pero una vez más los trabajadores se vieron defraudados. Es ahí donde entró Milei, planteando un programa que, en apariencia, era distinto a lo que se venía haciendo. Y lo hacía con un discurso antipolítica. Cuestionando los privilegios de la "casta".

Esto mientras que ni el peronismo, que estaba en el Gobierno, ni la izquierda, plantearon una salida radical a los problemas cotidianos de los trabajadores.

Hoy existe un núcleo duro que sigue apostando al Gobierno. Hay quienes empiezan a desconfiar, pero tantas decepciones les han llevado a una sensación de apatía. Y también están quienes esperan el llamado de sus dirigentes, que llamaron al paro días después de que se aprobara la Ley Bases en Diputados. Dirigentes que no han convocado a ninguna medida posterior. Dirigentes que negocian con el Gobierno las reformas para no perder sus privilegios, mientras al pueblo trabajador nos quitan lo poco que nos queda.

Con estas direcciones no vamos a ningún lado. Necesitamos nuevos y nuevas dirigentes que desplacen a estos dinosaurios atornillados al sillón. Mientras tanto, debemos tomar en nuestras manos las eventuales medidas nacionales de lucha que convoquen, para ir más allá de sus intenciones de garantizar la gobernabilidad de Milei.

Lo que Argentina necesita es una Revolución Socialista

Más allá de las disputas, las diferencias, y las peleas en el Congreso, hay un consenso entre los grandes empresarios y sus representantes, el Gobierno, y los partidos burgueses de oposición como el radicalismo, y el propio peronismo. Ese consenso es la Reforma Laboral.

El capitalismo argentino necesita sacarse de encima muchas de las conquistas históricas de los trabajadores para seguir funcionando. Esto obedece a la lógica empresarial en que la ganancia está por encima de todo. De la crisis salen los empresarios, aumentando sus utilidades a costa de nuestro sudor y nuestra sangre.

Como bien decía Manolito en las tiras de Mafalda: "nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás". Milei intenta vendernos a los empresarios como "benefactores sociales". Pero a lo único que benefician es a sus propios bolsillos.

Entonces tenemos que romper este ciclo de decepción. Hace falta que construyamos una nueva alternativa, tanto a la ultraderecha de Milei, como al peronismo, que viene acumulando decepciones.

Es necesario construir un programa de ruptura con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con las multinacionales y los grandes empresarios. Un programa que ponga los recursos de nuestro país al servicio del pueblo trabajador, garantizando educación, salud, vivienda, trabajo y esparcimiento de calidad.

Nuestra tarea en este momento es construir este programa junto a los activistas que están enfrentando el plan del Gobierno en todas las trincheras. En las luchas salariales. En las peleas por los derechos de las mujeres, de la comunidad migrante y LGBTI+. En la lucha contra la persecución y prisión a los luchadores populares.

Ponemos nuestras humildes fuerzas a disposición de esta tarea, pues los trabajadores necesitamos entender que otra salida es posible, que no debemos resignarnos al hambre, a la desocupación, a la represión. Que podemos organizar y planificar una economía a nuestro servicio, producir lo que realmente necesitamos y como distribuirlo. Tenemos la labor de presentar un nuevo horizonte a esta realidad tan convulsa.